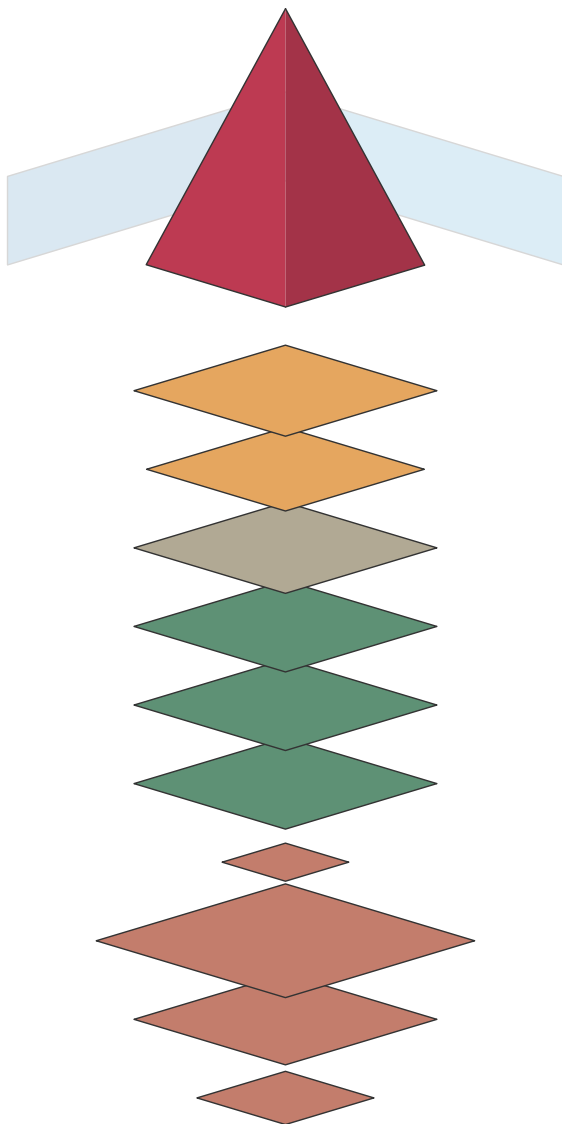



NICARAGUA




6,06
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

40.º de 193 países
11.º de 35 países americanos
5.º de 8 países de América Central


MERCADOS CRIMINALES **5,50**

TRATA DE PERSONAS	6,00
TRÁFICO DE PERSONAS	5,50
TRÁFICO DE ARMAS	6,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	6,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	6,00
COMERCIO DE HEROÍNA	2,50
COMERCIO DE COCAÍNA	7,50
COMERCIO DE CANNABIS	6,00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3,50


ACTORES CRIMINALES **6,63**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	5,00
REDES CRIMINALES	6,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	9,00
ACTORES EXTRANJEROS	6,00


2,46
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

175.º de 193 países
33.º de 35 países americanos
8.º de 8 países de América Central

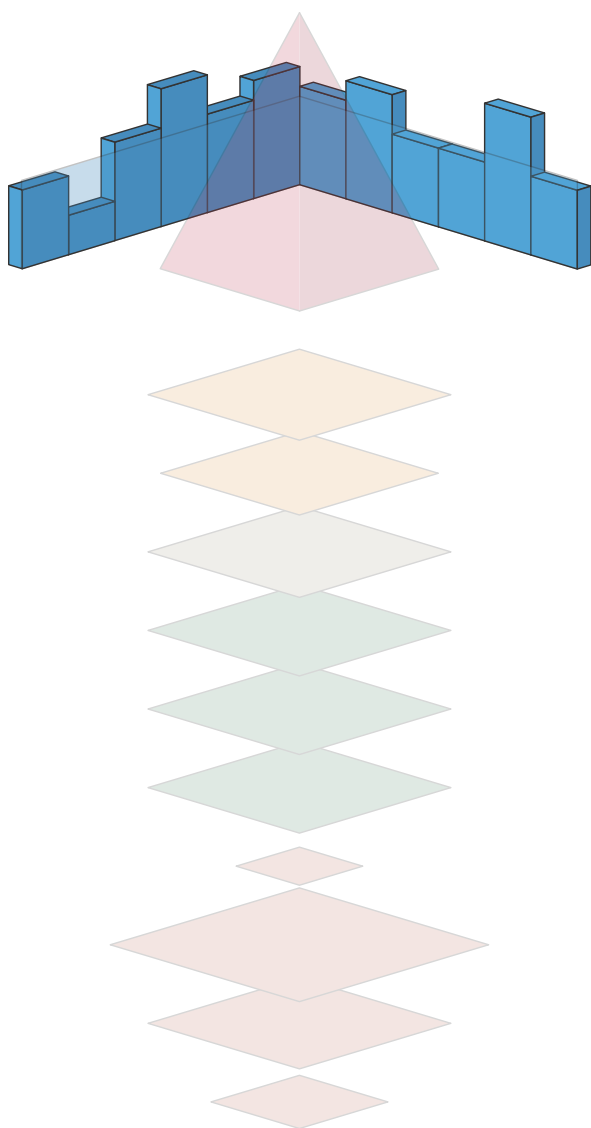


Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).


NICARAGUA




2,46
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

175.º de 193 países
33.º de 35 países americanos
8.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	2,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	3,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	2,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	3,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	2,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	2,00
PREVENCIÓN	3,50
ACTORES NO ESTATALES	2,00


6,06
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

40.º de 193 países
11.º de 35 países americanos
5.º de 8 países de América Central

 MERCADOS CRIMINALES	5,50
 ACTORES CRIMINALES	6,63



Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Nicaragua tiene un sólido mercado de trata de personas, con grupos delictivos que explotan a víctimas nacionales y extranjeras en el país, así como a nicaragüenses que viven en el extranjero. Además, la falta de esfuerzos eficaces de investigación, enjuiciamiento y prevención, la excesiva pobreza y la gran cantidad de personas sin certificados de nacimiento o documentos de identificación hacen que la situación sea particularmente crítica. Una gran proporción de las víctimas son mujeres y niños vulnerables a la trata sexual, aunque la explotación laboral también prevalece, particularmente en las industrias de la agricultura, la construcción, la minería y los servicios domésticos, tanto dentro del país como en Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

Nicaragua también es un país de origen y de tránsito para el tráfico de personas. Forma parte de una ruta internacional utilizada por migrantes irregulares cubanos, haitianos, africanos y asiáticos en su camino hacia Estados Unidos. A pesar de ello, el mercado del tráfico de personas es pequeño en comparación con el resto de América Central.

TRÁFICO

En Nicaragua existe un mercado considerable de comercio de armas y grandes cantidades de armas legales e ilegales, incluyendo armas hechas a mano, circulan en el país. Nicaragua también ha sido identificada como el punto de partida de flujos de armas ilícitos en dirección a Costa Rica y México, a menudo con la ayuda de funcionarios estatales. Se cree que actores extranjeros están a cargo de organizar el mercado, mientras que grupos locales organizan el transporte y la logística.

MEDIOAMBIENTE

El mercado de los delitos contra la flora en Nicaragua está bastante desarrollado, y cerca de la mitad de la madera talada a nivel local se trafica de forma ilegal debido a la alta demanda proveniente principalmente de China. Además, los envíos de madera ilícita se utilizan para traficar drogas y el mercado se ve ampliamente facilitado por la corrupción. La violencia asociada con el acaparamiento de tierras es un problema persistente en Nicaragua, y, en el año 2020, varios miembros de comunidades indígenas fueron asesinados por un grupo armado con presuntos vínculos con acaparadores de tierras involucrados en la tala ilegal. En Nicaragua también existe tráfico ilegal de animales, en especial felinos, loros, ranas arborícolas de ojos rojos y tortugas, destinados al consumo o al uso como mascotas a nivel nacional y para el extranjero. Esta situación es agravada por la falta de oportunidades de

empleo, a pesar de que el Gobierno está implementando una serie de estrategias para proteger la fauna silvestre. Además, Nicaragua tiene una de las tasas más altas de producción ilegal de oro en América Central, lo que contribuye a otro mercado ilegal muy valioso. El país alimenta el mercado ilícito de oro en Costa Rica proporcionando el mercurio que se utiliza en su extracción. Nicaragua también es un centro de lavado de los ingresos ilícitos de la extracción ilegal de oro, con la ayuda de funcionarios corruptos.

DROGAS

Nicaragua es un punto de transbordo de cocaína debido a su ubicación geográfica estratégica en la ruta que conecta a los países productores de América del Sur con los mercados de consumo de América del Norte. Las organizaciones criminales locales suelen colaborar con ciudadanos de Costa Rica y Honduras para transportar cocaína a través de Nicaragua, mientras que los cárteles mexicanos también tienen una fuerte presencia en el país. Se cree que el mercado ha crecido en los últimos años, en parte debido a la corrupción y la participación de funcionarios en el más alto nivel estatal. El cannabis es la droga más consumida en el país y es particularmente popular entre los adolescentes, más que nada debido a su bajo precio. Los grupos locales controlan la producción en el país, que satisface la demanda local. También se trafican cantidades de cannabis desde Honduras y Costa Rica, pero los organizadores de estos flujos son también grupos de Nicaragua.

Los mercados de heroína y drogas sintéticas son limitados debido a su precio relativamente alto. El estatus legal de la ketamina en Nicaragua lo convierte en un país de origen de tráfico, principalmente hacia Costa Rica, mientras que la metanfetamina producida en Nicaragua se distribuye en la costa caribeña del país.

ACTORES CRIMINALES

Nicaragua presenta una pequeña cantidad de grupos de tipo mafioso. El más notorio de ellos es Los Tarzanes, especializado en la logística y el transporte de cocaína desde Colombia, de cannabis desde Jamaica hacia Nicaragua, Honduras y México, así como de químicos precursores para la producción de metanfetaminas, armas y otro contrabando. También existen otros tipos de redes criminales, particularmente frecuentes en la trata de personas y el tráfico de drogas, fauna silvestre y madera, y tienden a trabajar con contrapartes internacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y México, entre otros. Además, la prevalencia de grupos armados de tipo paramilitar ha aumentado en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la crisis política y de derechos humanos en abril de 2018. Aunque la naturaleza de los grupos es controvertida, cada vez hay más pruebas de que estos grupos armados progubernamentales

operan en todo el país, utilizando la violencia para silenciar a los críticos y contando con el apoyo de las autoridades en todos los niveles. Sin embargo, en general, Nicaragua no presenta los mismos niveles de violencia a manos de actores criminales que otros países de América Central.

Los actores integrados en el Estado, que llegan hasta los niveles más altos del poder e incluyen a parlamentarios y miembros del Poder Judicial, están muy involucrados en los

mercados criminales de Nicaragua. Además, varios actores extranjeros, incluyendo el Cártel de Sinaloa y los Zetas de México y organizaciones colombianas y venezolanas, han establecido su presencia en Nicaragua y controlan el mercado del tráfico de cocaína en el país. Estos actores colaboran activamente con grupos locales que les brindan servicios como transporte y contactos.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Aunque Nicaragua tiene niveles de violencia mucho más bajos en comparación con otros países de la región, enfrenta serios desafíos de liderazgo y gobernanza. La actual administración presidencial ha sido acusada de colusión con organizaciones de tráfico de drogas, de facilitar abusos contra los derechos humanos y de promover prácticas corruptas. A pesar de las promesas oficiales de combatir el crimen organizado a través de programas contra el tráfico de drogas enfocados en asegurar las fronteras del país, miembros de alto nivel de la administración han sido criticados por presuntamente facilitar o participar activamente en estos delitos. Además, las autoridades han sido acusadas de graves violaciones de los derechos humanos luego de responder violentamente a una ola de protestas que comenzó en abril de 2018 en oposición a los cambios propuestos al sistema de seguridad social. A raíz de estas protestas, fallecieron más de 320 personas, miles de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas arbitrariamente. La mayoría de las muertes corresponden a asesinatos a manos de agentes del Estado o miembros de grupos armados alineados con el Gobierno. Además, Nicaragua ha avanzado cada vez más hacia el autoritarismo bajo el gobierno del presidente Ortega y la gobernanza se ha visto afectada por la falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, la falta de integridad de los funcionarios públicos y el aumento de las barreras del Gobierno para garantizar el acceso a la información pública, algo que se refleja en el hecho de que las cifras oficiales en ámbitos como la salud, el empleo y la igualdad de género se han manipulado o simplemente no se han publicado desde 2016.

Si bien el país forma parte de los tratados y convenios internacionales más relevantes relacionados con el crimen organizado y tiene acuerdos de extradición con países específicos, los nicaragüenses no pueden ser extraditados. Esto ha contribuido a que personas de alto perfil acusadas de delitos como corrupción y lavado de dinero escapen de la justicia. Si bien el país está trabajando con socios internacionales, incluyendo a Honduras para reducir las actividades ilícitas en la frontera y a Rusia para el desarrollo de capacidades para los cuerpos de seguridad, varios actores internacionales han criticado

severamente el historial de corrupción y derechos humanos del país, e incluso han impuesto sanciones o amenazado con hacerlo. A nivel nacional, el marco legal de Nicaragua incluye algunas leyes destinadas a combatir el crimen organizado, pero estas no contemplan crímenes contra los recursos naturales, como la extracción ilegal de oro, el tráfico de madera y el tráfico de fauna silvestre. Mientras tanto, algunas leyes aprobadas recientemente limitan en gran medida el trabajo de organizaciones políticas y de derechos humanos.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Nicaragua es extremadamente corrupto e ineficaz, y sus miembros son designados por el Congreso, que está controlado por el partido gobernante. Aunque no existan unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado en el Poder Judicial, los tribunales son propensos a la corrupción y la manipulación por parte de grupos criminales, cárteles de la droga y políticos. Además, el estado del sistema penitenciario es muy precario, con un grave hacinamiento y condiciones inhumanas, incluyendo la falta de agua potable. Todo esto contribuye a que las prisiones se conviertan en caldo de cultivo para las organizaciones criminales y alimenten la corrupción. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua han sido descritas como eficaces en cuanto a incautaciones de drogas, mientras que la Policía Nacional tiene una reputación menos positiva. Miembros de la Policía han sido acusados de trabajar junto a grupos paramilitares para cometer detenciones arbitrarias, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, aunque algunos sostienen que la Policía logró reducir los niveles de violencia en los barrios urbanos más pobres mediante programas de sensibilización y prevención de drogas. Tal como ocurre con la mayoría de los demás países de la región, los traficantes de drogas se benefician de la ubicación estratégica de Nicaragua, su extensa costa y la corrupción de los funcionarios para transportar drogas a través del país.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se estima que Nicaragua tiene uno de los mayores riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en el mundo y ha estado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde febrero de 2020. Los esfuerzos por abordar estos delitos, incluso a través del marco normativo del país, aparentemente solo se dirigen a personas consideradas como opositoras al Gobierno, mientras que las figuras de alto perfil solo han sido investigadas por estos crímenes en el extranjero. Además, aunque la legislación anticorrupción de Nicaragua es sólida en teoría y contempla entre otros el soborno, el abuso de poder y los obsequios a funcionarios públicos, no se aplica de manera efectiva. Por lo tanto, la corrupción desenfrenada dentro de las élites políticas del país es un impedimento importante para el funcionamiento de las instituciones estatales. Esto también crea un entorno difícil para las empresas extranjeras, lo que podría explicar por qué muchas empresas han abandonado el país en los últimos años, contribuyendo al aumento del desempleo y la pobreza.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Si bien el Gobierno desarrolló una Estrategia Nacional para la Atención Integral y el Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, no parece ofrecer mucho apoyo en la práctica. De hecho, muy pocas, si alguna, de las investigaciones de trata de personas conducen a enjuiciamientos, el Estado identifica muy pocas víctimas de la trata, el acceso al apoyo es casi imposible y existe poca o ninguna cooperación del Estado con la sociedad civil en materia de trata de personas. Aunque supuestamente existe un acuerdo entre el Gobierno y varios miles de empresas para monitorear y denunciar la explotación sexual infantil en el sector turístico, en la práctica no se ha llevado a cabo ninguna actividad. Sin embargo, se cree que Nicaragua está implementando algunos programas destinados a reducir la demanda de drogas, incluyendo en áreas como la prevención, el tratamiento y la integración social.

Aunque la Constitución del país garantiza la libertad de prensa, el Gobierno ha tratado de limitarla a través de varios mecanismos administrativos y judiciales. La gran mayoría de los medios de comunicación son propiedad o están bajo el control del Gobierno o sus aliados, y la libertad de los medios de comunicación se restringe a través de la persecución de periodistas, el abuso de las leyes de calumnia y difamación y el acoso judicial. La persecución de activistas sociales y personas consideradas como opositores políticos es severa, y ha habido decenas de denuncias de ataques, tortura y encarcelamiento injusto. Varias organizaciones emblemáticas de derechos humanos han perdido su estatus legal, lo que ha llevado a muchas personas a abandonar el país por miedo.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.